

LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES

Víctor Meza

El tema de las relaciones cívico-militares en América Latina ha merecido abundante atención y muchos estudios desde el mundo de la academia. Su importancia ha sido innegable y, en gran parte, ha estado asociado a la llamada “tercera ola” de la democratización en nuestro continente, cuando empezaron a surgir regímenes democráticos ahí en donde, hasta no hacía mucho, habían reinado impunemente los hombres de uniforme.

En la medida que caían, derrumbadas por el agotamiento histórico o forzadas por la presión popular, las dictaduras militares dejaban el espacio libre para procesos de transición hacia sociedades democráticas y plurales. El repliegue de los militares obedecía a diferentes causas y coyunturas, según el país y momento en el que se producía. En algunos casos, su retiro era el fruto directo de su propio fracaso en el manejo de las estructuras estatales. En otros, era el resultado de la creciente presión ciudadana, estimulada muchas veces desde fuera y desde dentro, con apoyo evidente de la comunidad internacional. También hubo retiros pactados, consecuencia de negociaciones entre los uniformados y los políticos profesionales. En algunas ocasiones, como en nuestro país, la salida de los militares obedeció en buena medida a la presión procedente de Washington, ansioso ya por hacer recambios en las piezas de su ajedrez regional, una vez derrumbado el Muro de Berlín y reconfigurado el panorama político regional.

O sea que los militares retornaron a sus cuarteles ya sea por la fuerza de la presión ciudadana o como resultado de una combinación de presiones endógenas y exógenas, condicionadas ambas por el ocaso de la guerra fría. Pero, en cualquiera de los dos escenarios, lo cierto es que volvieron a sus refugios, casi siempre, vencidos y frustrados, luego de haber tenido experiencias sangrientas y corruptas en la administración del Estado. Triste final para un proceso cuyo comienzo había sido ilegal y violento.

El repliegue castrense y el resurgimiento de los partidos políticos al inicio de la transición hacia la democracia, tuvieron características especiales en Honduras. Fue un retiro gradual, negociado, con concesiones lentas por ambas partes, casi a regañadientes. La transición se volvió un proceso tutelado, bajo el signo arbitral de los

militares que, poco a poco, regresaban a sus cuarteles. Por eso mismo, la transición política en Honduras ha sido tan difícil, con abundantes altibajos, con momentos de avance y otros de parálisis, con demasiada incertidumbre.

La fase de la **militarización avasalladora** del Estado y la sociedad hondureña, iniciada formalmente en 1963, con el golpe de Estado del 03 de octubre de ese año en contra del gobierno liberal de Ramón Villeda, se prolongó en el tiempo y en el espacio, hasta alcanzar los primeros años de la última década del siglo XX. A partir del año 1994 dio inicio la segunda fase de este proceso, la fase de la **desmilitarización gradual y moderada**, que comenzó con cierto entusiasmo en el gobierno de Carlos Roberto Reina y, poco a poco, fue perdiendo intensidad y fuerza en los siguientes gobiernos, liberales o nacionalistas. La tercera fase es la que estamos viviendo. Arrancó literalmente con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y se mantiene vigente hasta ahora. Es la fase de la **remilitarización regresiva**, que se caracteriza por una cada vez más evidente y peligrosa recuperación del protagonismo castrense en la vida nacional.

A partir del golpe de Estado del 2009, los militares consolidaron las antiguas posiciones que todavía no habían perdido en el proceso de transición política. Pero no sólo eso. Al mismo tiempo, ampliaron el radio de acción de sus viejas influencias y, lo que es más preocupante, obtuvieron o conquistaron nuevos espacios y cuotas de poder dentro del engranaje estatal. Esta triple estrategia de **consolidar, ampliar y aumentar** los espacios de poder estatal, no habría podido ser exitosa si no fuera por la colaboración cómplice de los gobernantes de turno. Los políticos civiles, del color que sea, se han mostrado anuentes y serviles atendiendo los reclamos castrenses y fortaleciendo el resurgimiento del antiguo militarismo en el escenario político y social de Honduras.

En el gobierno anterior, este proceso de remilitarización paulatina fue evidente desde el momento mismo en que se conformó el nuevo equipo gubernamental. La cúpula golpista fue absuelta de toda culpa y al jerarca operativo de la asonada lo premiaron otorgándole la empresa telefónica para que terminara de hundirla en la ineficiencia y la corrupción. Así lo hizo, cumpliendo a cabalidad la misión encomendada.

En este gobierno, la manía castrense de sus dirigentes es más que evidente. Se expresa hasta en el lenguaje cotidiano. Y, por supuesto, en las medidas de política pública, especialmente en el sector seguridad. Es como si un subconsciente

uniformado se escondiera en los entresijos del alma gubernamental, y aflorara, cuando uno menos se lo espera, mostrando sus charreteras mentales y el sable desenvainado. Las palabras, que son vehículos del pensamiento, les traicionan y denuncian. Los gestos ridículamente “marciales” también los evidencian. La disciplina, el mando, el orden, el verticalismo y, por supuesto, la vocación autoritaria y tiránica en el ejercicio del poder, todo ello, en su conjunto, son indicios suficientes para que los ciudadanos de a pié nos demos cuenta, por fin, que estamos viviendo una peligrosa etapa de involución política, un lamentable y nocivo retroceso hacia la barbarie. Hay que impedir este descenso mortal..